

## **“Hands off”: la diplomacia norteamericana ante la Argentina de 1976**

El período en que Argentina se sumió en la violencia política y el terrorismo de Estado, el que va de fines del gobierno de Isabel Perón al comienzo de la dictadura del Proceso de Reorganización Nacional, coincidió con el fin de la administración republicana encabezada por Gerald Ford en Estados Unidos. Administración que, orientada en su política exterior por Henry Kissinger, había participado ya activamente en apoyo al golpe militar contra Salvador Allende en Chile, la militarización y posterior golpe en Uruguay, y resistía las presiones de los demócratas en el Congreso para tomar distancia e incluso condenar a los gobiernos militares resultantes, que llevaban a cabo feroces acciones represivas contra todo lo que consideraban “amenazas comunistas” en la región. Categoría, como sabemos, muy amplia y cuyo combate justificaba para esos gobiernos las más crueles formas de violación de los derechos humanos de sus ciudadanos.

Está bien documentado, y se han escrito ya detallados estudios sobre la postura promilitar y fervientemente anticomunista del Secretario de Estado, Kissinger, en esos casos en particular y más en general en América Latina; y el impacto que esa postura tuvo para el establecimiento y consolidación en esos años de regímenes militares tan duros como prolongados, y para que los mismos asumieran que tendrían “carta blanca” para violar derechos humanos de sus ciudadanos en el curso de la ejecución de sus políticas de seguridad interna. El “Informe Kissinger” realizado por John Dinges con el material documental reunido por el National Security Archive ha documentado muy ampliamente esta orientación del Departamento de Estado en aquellos años, ilustrando fundamentalmente lo sucedido en relación al caso chileno. A priori, pareciera ser posible extender estos argumentos, sin mayores especificaciones, a otros casos, por ejemplo, al argentino. Por cierto, la proximidad espacial, temporal e ideológica con los casos de Chile y Uruguay, así como algunas sintonías rápidamente establecidas entre los gobiernos militares de esos distintos países, parecen avalarlo: la represión ilegal desatada entre 1974 y 1975 en Argentina, el golpe de estado de marzo de 1976 y las proclamas anticomunistas y “occidentales y cristianas” de sus responsables, más la muy efectiva colaboración de los aparatos represivos de los tres países para la persecución de activistas revolucionarios o

simples opositores, que en particular afectó a exiliados chilenos y uruguayos radicados en Argentina en los años anteriores, lo confirmarían.

Sin embargo, existen una cantidad de datos y argumentos para dudar de que se justifique, a partir de estas similitudes, identificar sin más estos distintos casos. Y también para establecer a partir de estas similitudes y de la coexistencia temporal que señalamos, una relación causal de algún tipo entre la gestión de Ford-Kissinger, y el golpe de estado de 1976 en Argentina y las políticas llevadas adelante por el Proceso.

En lo que sigue presentaremos documentos desclasificados sobre las relaciones entre Argentina-EEUU en el período que revelan diferencias significativas que existieron desde un comienzo para la diplomacia norteamericana entre este caso y otros de la región, el muy distinto enfoque de los problemas locales que una porción importante de los funcionarios del Departamento de Estado asumieron, vis a vis la que habían asumido frente a los casos de Chile y Uruguay, y a partir de ello analizaremos también evidencia sobre el efecto que estas señales externas tuvieron sobre las acciones represivas y la toma y ejercicio del poder por parte de los militares argentinos, para responder dos interrogantes de enorme relevancia, en particular para la comprensión de este caso, y más en general del período en la región. Primero, ¿en qué medida la posición norteamericana ante los acontecimientos que tenían lugar en Argentina confirman la sintonía entre las preferencias del jefe de la diplomacia de EEUU y el auge del poder militar en el país; y en qué medida en cambio estaban influyendo en la política exterior efectivamente seguida por la administración republicana las experiencias acumuladas desde 1973 a raíz de los golpes en Uruguay y Chile y las críticas crecientes por violaciones a los derechos humanos que los gobiernos de esos países recibían, en particular las provenientes del Congreso de EEUU. Segundo, ¿estas presiones influyeron en la actitud adoptada por los militares argentinos en dirección a crear una imagen de moderación represiva y respeto de la legalidad, mientras se aplicaba secretamente un plan represivo ilegal, y en ese caso, cuán efectivo fue este doblez de la política represiva y exterior para mejorar las relaciones con EEUU, tanto en ese momento como en el futuro inmediato? En suma, nos preguntamos sobre los aprendizajes que realizaron tanto los decisores de política exterior norteamericana como las cúpulas militares

argentinas a raíz de los problemas que se habían ido acumulando en la agenda de la relación entre EEUU y la región, desde comienzos de esa década, y que habría de generar crecientes tensiones entre ambas partes al final de la misma.

Las conclusiones que hemos extraído del material documental analizado y de las entrevistas realizadas a actores relevantes del período son las siguientes: primero, Argentina fue, ya entre 1975 y 1976, un caso aparte para una porción significativa de la diplomacia norteamericana, por su complejidad y virulencia, lo que implicó que, más allá de las preferencias promilitares y anticomunistas que la guiaban (especialmente intensas en el caso de su jefe, el secretario de Estado Kissinger), ella mantuviera una actitud que globalmente podemos denominar “prescindente”; segundo, el cambio de tendencia que se estaba produciendo en los Estados Unidos, las crecientes críticas del Congreso y de importantes sectores de la opinión pública y la proximidad con las elecciones que darían lugar a una vuelta de los demócratas al poder, influyeron decisivamente para que los argentinos adoptaran el método de las desapariciones y promovieran a un general al menos en apariencia moderado como jefe del Ejecutivo; tercero, el hecho de que la militarización y la represión en Argentina se pudiera documentar con detalle bastante tempranamente, pese a las apariencias de moderación y que no se pudiera considerar “auspiciada por la política exterior norteamericana”, alentó al Departamento de Estado a hacer de este caso uno en que las consideraciones morales sobre la política local se tendrían en cuenta desde el comienzo, para no cometer otra vez los mismos errores de Chile y Uruguay. En el caso argentino, por tanto, más que un giro en la política norteamericana, como la que se produciría hacia Uruguay y Chile a partir del momento en que, a comienzos de 1977, llegue a la Casa Blanca James Carter, puede observarse más bien un progresivo deslizamiento desde la prescindencia ante un escenario complejo en el cual la violencia parecía más un producto de la interacción entre actores con relativo o nulo apoyo del Estado (organizaciones guerrilleras y bandas de derecha para-estatales) que una decisión centralizada de parte de la Junta Militar. El paulatino aprendizaje de la diplomacia norteamericana sobre anuencia de todas las facciones militares, incluyendo a los moderados, frente a la represión ilegal terminaría haciendo de la Argentina un *leading case* en materia de defensa de los derechos humanos y denuncia de su violación.

## **La diplomacia de Kissinger y la eficacia de las críticas del Congreso norteamericano**

Existen por cierto no pocas pruebas a favor de la tesis del aval norteamericano a la represión “anticomunista” en Argentina, tanto antes como después del golpe. Varias de esas pruebas son documentos desclasificados del Departamento de Estado, que han sido ampliamente discutidos en trabajos académicos y periodísticos: las conversaciones entre Kissinger y sus subalternos, y entre aquél y el primer canciller del Proceso, Guzzetti, en Santiago de Chile y en Washington, destacan entre ellas<sup>1</sup>. Ellas revelan el decidido ánimo promilitar del jefe de la diplomacia norteamericana.

Sin embargo, si esas conversaciones se colocan en el contexto más amplio de las discusiones sobre la posición a adoptar hacia Argentina que tuvieron lugar en el DOS y entre él y la embajada en Buenos Aires entre fines de 1975 y la primera mitad de 1976, su significación varía sensiblemente. En lo que sigue se intentará mostrar que la posición norteamericana hacia los militares argentinos difirió de la adoptada en otros casos, en particular en Chile y Uruguay, desde bastante antes del golpe de marzo de 1976, que en ello influyó desde un comienzo la posición escéptica, cuando no francamente pesimista, de funcionarios clave para la toma de decisiones al respecto (principalmente, el embajador en Buenos Aires, Robert Hill, y el Subsecretario del ARA, William D. Rogers), y que el resultado del cruce entre la información que estos funcionarios manejaban de que no había una cabeza clara y visible de la represión ilegal en la Argentina, y las preferencias del secretario de estado Kissinger en permitir que la represión continuara su curso hasta una total derrota de las organizaciones guerrilleras determinó que la actitud diplomática de los Estados Unidos resultara en una combinación de expresiones abiertas de apoyo (en particular en el caso de Kissinger) con una distanciamiento prudente en una situación en la que no era claro si había algún interlocutor viable.

---

<sup>1</sup> Es importante destacar que en la desclasificación de muchos de esos documentos que involucran directamente a Kissinger en la represión en Argentina y en general en el Cono Sur, influyó al menos en alguna medida motivaciones políticas e incluso personales: Madeleine Allbright, la Secretaria de Estado de Clinton que aprobó la desclasificación de los papeles de su antecesor sabía muy bien lo que hacía.

Una lectura atenta de documentos del Departamento de Estado sobre el caso argentino desclasificados recientemente, si bien confirma el interés de Kissinger por dar apoyo a la Junta, así como se hacía con los regímenes anticomunistas en general, y los encabezados por militares en América Latina en particular, revela también que preocupaciones de otra índole no eran desestimadas: contra la idea de que las denuncias por violaciones a los derechos humanos no preocupan al Departamento de Estado, ni en general a la administración Ford, se advierte en varios funcionarios clave de la administración republicana una seria inquietud por no repetir la experiencia chilena. Es decir, ha habido un cierto “aprendizaje” en cuanto a los problemas que implica involucrarse con regímenes que pueden ser tachados de “violadores sistemáticos” de los derechos humanos, y que es preciso considerar además de los problemas de seguridad, otros asuntos en la toma de decisiones sobre la política exterior. Este aprendizaje no casualmente influirá en el posicionamiento norteamericano frente a un caso que es a la vez muy complejo, y estratégicamente poco relevante, como es Argentina; con lo que se abrirá la puerta para hacer de él un *leading case* en la materia, durante la siguiente administración.

### **El camino hacia el golpe de estado en la Argentina**

Durante el período que va desde finales de 1975 hasta marzo de 1976, la embajada norteamericana consideraba la posibilidad de un golpe de estado como una alternativa entre varias opciones, y no necesariamente la preferida por el liderazgo de las Fuerzas Armadas. De acuerdo a sus análisis, ello obedecía no tanto a una creciente amenaza insurgente, como al debilitamiento progresivo e incontenible del gobierno de Isabel Perón, las luchas facciosas y el caos resultante en el peronismo, y la contribución que realizaban al respecto una gran variedad de grupos armados, de distinta orientación. La presencia de fuerzas “insurgentes” no era desatendida, pero se valoraba en un contexto en que las hipótesis más fuertes eran las que preveían un desorden agudo y prolongado; en la forma de una guerra civil o una lucha “todos contra todos”. La posibilidad de un golpe militar se evaluaba, a su vez, en este marco, sea como un medio para “restablecer el orden”, sea como factor catalizador de las luchas en curso.

En un análisis de septiembre de 1975 el embajador norteamericano Robert Hill reportaba a Washington que ante el deterioro de la situación política y en particular del liderazgo de Isabel Perón se estaba acentuando, por lo cual *“es probable (aunque tal vez todavía no sea inevitable) que las Fuerzas Armadas en algún punto van a tener que intervenir, quieran o no y ya sea de un modo directo o indirecto”* ya que *“son el único sector cohesionado que queda en pie capaz de llevar el vacío”* (19750910 Analysis of Political Situation, p. 2). En la opinión del embajador, las Fuerzas Armadas argentinas eran contrarias a una interrupción del orden democrático, según él porque pesaban las experiencias previas frustradas, y solamente recurrirían a una acción de este tipo de considerar que no había otra alternativa posible. Por lo tanto, Hill estimaba probable que una intervención de las Fuerzas Armadas ocurriera únicamente en una situación de extremo deterioro del orden político y económico. Además preveía que, en una situación de ese tipo el único sector con capacidad de mantener cierta unidad y capacidad de influencia política sería el sindicalismo; por lo tanto, los militares *“indudablemente intentarían alcanzar algún tipo de entendimiento con la dirigencia sindical, pero los intereses de las dos instituciones no van en el mismo sentido. Las Fuerzas Armadas estarían del lado de la austeridad económica; los sindicalistas no. Por ende, hay un terreno poco sólido para un entendimiento; por lo tanto, las relaciones entre los dos sectores probablemente se parecerían más a las del período Lanusse, es decir, el sindicalismo mantenido a raya por medio de zanahorias y palos, y probablemente más de lo último que de lo primero”* (19750910, p. 9).

El análisis de Hill considerando que las Fuerzas Armadas eran el principal actor con cohesión y capacidad suficiente para conducir un gobierno que enfrentara a la crisis institucional y económica coincidía con la visión del espía chileno en Buenos Aires Arancibia Clavel, quien a mediados de septiembre reportó a Santiago de Chile: *“El general Videla está dentro de la línea «profesionalista» del Ejército, cuya «orden de mando», es «esperar la descomposición». El proceso argentino pasa inevitablemente por el poder militar. El concepto se funda con mayor vigencia hoy por lo que sucede en cada una de las estructuras del poder. En este cuadro de deterioro total el país pide seguridad y autoridad [...] Sólo quedaba el poder militar. En un esfuerzo desesperado, López Rega desde Madrid y Julio González desde la Casa Rosada, juegan la designación de Damasco y otros*

*coroneles con ambición política. Había que tentar a los militares antes de caer como en el 55. Este proceso que pasa inevitablemente por una guerra ya entablada, donde la conducción civil ha fracasado en el frente político, económico y social, los hechos están demostrando que – más allá de la personalidad de sus actores – habrá que transitar por el camino duro de la lucha de todos, conducida por poder militar” (19750914.tif Memorandum).*

Pero hacia finales de 1975 un fallido levantamiento de un sector de la Fuerza Aérea liderado por el Brigadier Capellini y la batalla campal entre tropas del ejército y la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) por el intento de este último de tomar el cuartel de Monte Chingolo aceleraron la decisión de los altos mandos. Un cable secreto enviado por Arancibia Clavel a Santiago de Chile describía la situación de esta forma: *“La rebelión de la VII Brigada funcionó como acelerador, nada más. Pero a partir de allí cambió la situación militar, especialmente en el Ejército. Una serie de situaciones y posiciones que estaban potencialmente en jefes y comandantes salieron a la superficie: de observadores atentos pasaron a ser deliberantes preocupados. La consigna del más alto nivel militar es que no se puede romper la cohesión interna del arma. En materia de decisiones, todo el problema está ahora, en manos del Ejército [...] el arma, ahora, está en tiempo de definiciones, y sabe de la responsabilidad” (19751226.tif Memorandum).*

En un cable de febrero de 1976 el funcionario de la Oficina de Inteligencia e Investigaciones del Departamento de Estado James Buchanan mantenía las dudas expresadas por Hill, al afirmar que dada la trayectoria de los anteriores golpes militares no había ninguna certeza de que los militares, y en particular la cúpula del Ejército, tendrían el “estómago” para implementar duras medidas represivas para poner la situación política bajo control (19760220.tif Memorandum). Y caracterizaba al comandante en jefe del ejército Videla como un hombre “cauto y dubitativo”, que no estaba convencido de llevar a las Fuerzas Armadas a otra incursión en el ejercicio del gobierno dado el fracaso de la experiencia previa (en referencia al gobierno de facto de 1966-1973). Buchanan incluso evaluaba la posibilidad de que oficiales del Ejército dieran un golpe contra Videla si éste continuaba negándose a asumir el control del gobierno (19760220.tif Memorandum). En el

mismo cable se manejaban dos hipótesis de golpe de estado: *“un golpe relativamente espontáneo y sin ensayos, provocado por una acción particularmente ofensiva de la Sra. Perón, probablemente implicaría un nivel bajo de planeamiento y coordinación; estas condiciones favorecerían la sucesión ya sea de un régimen civil o bien de un régimen militar que haga de custodia”*; la otra alternativa era la de *“un golpe más cuidadosamente orquestado acompañado por extensivas consultas y coordinación previas, que acrecentaría sustancialmente las chances de un régimen militar extendido en el tiempo”* (DOS 19760220.tif Memorandum, p. 5).

En el mismo sentido, un documento de la CIA posterior al golpe militar afirmaba que las Fuerzas Armadas habían estado expectantes hasta último momento antes de dar el golpe, para dar al gobierno de Isabel la posibilidad de reformarse o desacreditarse completamente (19760402 Argentine coup in perspective CIA.tif). Un documento de la DIA de esos mismos días explicaba las tendencias previas al golpe en los siguientes términos: *“La limitación demostrada por los militares en no intervenir en el gobierno hasta fines de marzo se debe fundamentalmente a dos razones. En primer lugar, tenían miedo de no estar preparados y de no ser más exitosos en gobernar que los gobiernos militares previos. En segundo lugar, estaban esperando una solución constitucional a la crisis política que excluyera la necesidad de la intervención militar y que pusiera la carga de restaurar la economía en un presidente constitucionalmente designado, como el Presidente Provisional del Senado, Ítalo Luder. Sin embargo, los militares de línea dura empezaron a hacer campaña a favor de un golpe militar a mediados de 1975, e inclusive los moderados y constitucionalistas empezaron a sentir a principios de 1976 que si intentaban demorar el golpe hasta que el gobierno peronista fuera totalmente repudiado por la gente, los de línea dura se precipitarían y establecerían un régimen represivo de derecha. El hecho de que los sindicatos y otros elementos políticos así como la mayoría del sector público se apartaran del peronismo y solicitaran la intervención de los militares probablemente haya ayudado a poner el golpe en movimiento. Esta consideración, sumada a la planificación extensiva previa al golpe, y a la declaración de la nueva junta militar de que favorece un retorno al sistema democrático pueden ser factores decisivos a la hora de*

*evaluar si el gobierno será más exitoso o no que las administraciones militares previas en gobernar el país” (19760408 Argentina peronisms fall from power DIA.tif).*

Un cable enviado por Arancibia Clavel a finales de febrero de 1976 también da sustento a la versión de que hasta comienzos de 1976 entre los altos mandos de las FFAA había dos proyectos en danza, el de un golpe militar y el de una salida “constitucional” con una mayor intervención de las FFAA dentro de un gobierno civil. El 26 de ese mes el espía escribía: “...*se ha desatado una carrera entre la posibilidad de un proceso parlamentario-constitucional y la de un procedimiento militar. Cada momento que pasa va esfumando el primero y agigantando la proximidad del segundo [...] la necesidad de una decisión se volcaba, con aspecto de inexorable sobre las espaldas militares. Los mundos de las tres fuerzas, a mitad de la semana pasada, conjugaron en la observación de que ya no quedaba casi más tiempo para dilaciones, no sólo porque la crisis había llegado a un punto de no retorno, sino porque cualquier nuevo retraso podía costar males irreparables”* (19760226). Así fue como a mediados de marzo de 1976 la discusión parecía totalmente cerrada, de acuerdo a lo reportado por el chileno: “*La situación política interna sigue deteriorándose a pasos agigantados. El pronunciamiento militar se ha ido postergando porque no existe criterio unánime aún entre las FFAA. Como golpe, está estructurado y sólo falta definir el día D”* (19760315.tif Memorandum).

Entre los altos mandos, mientras se cerraban los detalles logísticos de la ejecución del golpe, se había comenzado a discutir también otro asunto que tendría enorme relevancia: la forma de evitar que el futuro gobierno militar argentino cayera en el mismo saco que el que lideraba Pinochet en Chile, es decir, un régimen violento y opresivo que merecía un amplio repudio internacional. Entre febrero y marzo de 1976 Arancibia Clavel tuvo acceso a diversas informaciones que ilustraban esta preocupación de los argentinos. El 9 de marzo el chileno reportó a Santiago: “... *el golpe está estructurado hasta sus más ínfimos detalles, incluso oficiales del Estado Mayor se han acercado a nuestra Embajada para hacer consultas sobre la manera de manejar las informaciones para el exterior aprovechando nuestra experiencia”* (19760309.tif Memorandum). Para evitar problemas con el gobierno norteamericano, escribió Arancibia a Santiago de Chile, los argentinos

habían ideado una estrategia que contemplaba una cara de moderación que se mantendría en paralelo a las actividades represivas: *“La idea es hacer una revolución blanda para que se vaya endureciendo con el tiempo. Los militares argentinos están preocupados por la situación preelectoral norteamericana, y no quieren tener problemas a futuro con los créditos y la venta de armamentos. La otra preocupación con respecto a no despertar las iras de EEUU es Brasil”* (19760226 Argentina Military agree coup is necessary.tif).

Por lo mismo, la diplomacia norteamericana se reserva un pronóstico respecto a lo que puede suceder en el país, en cuanto a los grupos militares que pueden imponerse y sus planes, y también en cuanto a la duración, intensidad y resultados de la represión. La presencia de bandas armadas irregulares, paramilitares o más informales y con apoyos diversos, mucho más extendida que en Chile y Uruguay, lleva a los diplomáticos y analistas a concluir que en cualquier caso el que sea que recomponga el orden tendrá que disciplinar a diversos actores y hacer un gran esfuerzo por restablecer el monopolio de la violencia<sup>2</sup>.

El antecedente de Chile del '73 no sólo preocupaba a los argentinos: cuando el golpe se volvió inminente, la recomendación que William Rogers hizo desde el DOS fue que debían realizarse todos los esfuerzos posibles para no aparecer involucrados. En varios documentos de esa etapa se señala la imperiosa necesidad de no hacerle el juego a los militares argentinos que deseaban contar con un abierto respaldo norteamericano para su intervención. El deseo de los diplomáticos norteamericanos de mantener una prudente distancia del golpe militar motivó incluso en alguna medida la decisión del embajador Hill de partir de la Argentina a los Estados Unidos el 17 de marzo, ante los fuertes rumores de la proximidad del derrocamiento de Isabel: no había que dejar la menor impresión de estar detrás de los conspiradores militares (19760316 Ambassadors conversation with admiral Massera 0000A.tif).

---

<sup>2</sup> Los estudios periodísticos o históricos que destacan el carácter planificado de la represión ilegal por parte del Proceso han tendido a desestimar este problema, queriendo con ello desmentir el argumento posterior de las Juntas en cuanto a que ellas no controlaban de modo efectivo a los grupos represivos. En este trabajo intentamos mostrar que no existe incompatibilidad entre el argumento sobre la planificación y el que advierte sobre el problema de descomposición de la unidad represiva. Precisamente, la particularidad del caso argentino a este respecto es que esta fragmentación seguirá operando, incluso será un arma de la lucha facciosa dentro mismo del régimen militar.

Y, finalmente, tras producirse el golpe, Rogers ratificaría esta postura, anticipando una muy alta probabilidad de “tener serios problemas con el nuevo gobierno como resultado de sus política en cuanto a censura y derechos humanos” (19760324 Argentine Armed Forces Take over government.tif). Ello sin duda no era compartido por todo el DOS. No lo era por caso, por Kissinger. Sin embargo la posición de Rogers influyó en la política adoptada: la conversación que tiene lugar entre Kissinger y su gabinete dos días después del golpe, en la que Rogers informa de la situación esmerándose por mostrar la complejidad de la misma, es reveladora sobre este punto. Kissinger propone allí “animarlos... no quiero darles la idea de que son hostigados por Estados Unidos”, en tanto Rogers sugiere “no poner demasiado en juego”, “no actuar precipitadamente” y presenta como un hecho que “Hill mantendrá la boca cerrada” (19760326 Secretary of State Kissinger Chairman pages 19-23.tif):

*“debemos esperar un nivel considerable de represión, probablemente mucha sangre en Argentina en el corto plazo... aunque ahora tienen buena prensa.... el punto es que en este momento no debemos apresurarnos y apoyar al nuevo régimen, que tres, seis meses después será considerablemente menos popular con la prensa*

*SECRETARIO KISSINGER: Pero tampoco deberíamos hacer lo opuesto.*

*McCLOSKEY: ¿Qué dijimos sobre el reconocimiento?*

*ROGERS: Bueno, esta mañana vamos a enviar una nota formal en respuesta a su pedido de reconocimiento, como han hecho casi todos los países de América Latina. Pero más allá de eso, Hill mantendrá la boca cerrada.*

*SECRETARIO KISSINGER: Sí, pero ¿qué significa eso concretamente? Tengan la posibilidad que tengan, van a necesitar un poco de estímulo de nuestra parte. ¿Qué les está diciendo?*

*ROGERS: ¿Qué? Ah, nada. No ha hablado con ellos todavía. Todavía no ha sido invitado a hablar con ellos. Está listo para ir y a hablar con ellos cuando y si piden una reunión. Pero los Generales que están ocupando los cargos ministeriales están temporariamente, probablemente por esta semana, hasta que la junta tome su decisión final sobre a quién van a designar. En una semana definirán a quién van a designar.*

[...]

*SECRETARIO KISSINGER: ¿Pero puedo ver algunas de las instrucciones que le vas a dar a Hill si alguien se acerca...*

*ROGERS: Sí.*

*SECRETARIO KISSINGER: ... porque quiero animarlos. No quiero darles la idea de que son acosados/hostigados por Estados Unidos.*

*ROGERS: No. Por lo que estaba preocupado en un principio era por la postura pública.*

*SECRETARIO KISSINGER: Estoy de acuerdo.”*

Como vemos, Kissinger presiona por un apoyo más o menos decidido, en tanto Rogers advierte sobre la peculiaridad del caso argentino y los riesgos que corre Washington de involucrarse en él. Y se dispone así “esperar a que otros países de la región reconozcan al gobierno de la Junta” para proceder a hacer lo mismo (según la postura que ya había sido sugerida por Rogers tiempo antes, 19760213 Possible coup in Argentina.tif). Visto desde hoy, cabe destacar lo ajustado de la previsión que Rogers y otros funcionarios del DOS estaban entonces planteando: no tardaría en confirmarse que la represión ilegal en Argentina se había vuelto aun más brutal y extendida que en el caso chileno. Pero en relación a los cables anteriores a marzo, es notorio el contraste entre la ajustada idea de Rogers y los reportes de la embajada manifestando dudas sobre si los militares serían capaces de implementar un programa represivo de magnitud. Es posible que los funcionarios del DOS conjeturaran que el golpe secretamente planificado y organizado era un indicio de la disposición de los jefes militares a llevar a cabo una represión contra todos aquellos sectores (en particular los sindicales) que pudieran oponerse al programa militar.

Como sea, la conclusión que cabe extraer de estos debates y decisiones es que la política hacia Argentina estuvo desde un comienzo orientada, a diferencia de lo sucedido con los previos golpes militares en el Cono Sur, más bien a demostrar, al menos en público, que EEUU no participaba de los conflictos internos del país. Es decir, una estrategia de “hands off”: tomar distancia, reconocer al gobierno surgido del golpe pero sólo luego de que lo hicieran otros países de la región, no aparecer legitimándolo ni legitimando todas sus acciones represivas, etc.. Contra la idea de una indiferencia del DOS a las denuncias por violaciones a los derechos humanos y a las críticas del Congreso al respecto, y sobre la

homologación entre los casos de Chile y Uruguay y el caso argentino, éste fue, aun para la administración Ford, un caso aparte.

### **Halcones y palomas en el Proceso a los ojos del Departamento de Estado**

El que para el gobierno norteamericano las críticas por violaciones a los derechos humanos cometidas por gobiernos anticomunistas o “amigos” no eran totalmente indiferentes fue algo que ya los militares argentinos habían entendido muy bien, y frente a lo cual se prepararon, a su manera, para cuidarse en salud desde un comienzo: de allí la importancia otorgada por ellos a demostrar al mundo y en particular al gobierno norteamericano que el Proceso no seguiría el “modelo de Chile” (Charosky, 2006).

En conversaciones previas al golpe se puso de relieve el interés de militares argentinos por mostrarse moderados en la cuestión represiva: en una conversación entre Hill y Massera, el almirante dio a entender al embajador que el objetivo central de un futuro gobierno militar sería el de derrotar a la subversión, pero que no procedería como el gobierno de Pinochet sino que lo haría “dentro del estricto marco de la ley” y con “pleno respeto de los derechos humanos”. Hill se dio por satisfecho con la conversación, considerándola un indicio de que los moderados serían quienes encabezarían el golpe militar (19760316 Ambassadors conversation with admiral Massera 0000A.tif).

Durante el primer año del Proceso, la diplomacia norteamericana tuvo efectivamente dificultades para determinar cuán involucrada estaba la cúpula del gobierno argentino en la represión ilegal. La idea sobre un supuesto “enfoque moderado” de Videla respecto a los derechos humanos ya estaba instalada desde los primeros días del régimen (o incluso antes, como hemos visto). A seis días del golpe militar, el embajador Hill afirmaba que hasta el momento no había habido ni arrestos masivos ni fusilamientos, y lo atribuía a que había prevalecido la “línea moderada de Videla” (19760329 Videla’s moderate line prevails 0009F2.tif). Se estimaba que Videla era suficientemente fuerte para mantener a raya a los duros, agregando que “probablemente éste fue el mejor ejecutado y más

civilizado de los golpes de estado” (19760329 Videla’s moderate line prevails 0009F2.tif); de fracasar Videla, se temía la toma del poder por sectores “duros”, “más nacionalistas y con una actitud más distante con EEUU y los inversores americanos”. El trato moderado que estaban recibiendo los dirigentes sindicales era una prueba, para Hill, de que el régimen no era excesivamente represivo y que buscaba una “relación aceptable” con los gremios y más en general con la sociedad (19760325 Preliminary goa labor relations.tif).

El 11 de mayo de 1976 Hill reportaba el malestar que había en los partidos radical y peronista por sentirse perseguidos, pero también que ellos no acusaban a Videla, pues creían que él no tenía “poder suficiente para controlar a los duros”. Hill afirmaba que esto coincidía con el análisis de la Embajada (19760511 Junta’s moderate line). El 23 de Julio de 1976 el consejero político de la Embajada Maxwell Chaplin ofrece una variante de esta tesis, algo más realista: afirmaba que, en circunstancias ideales, Videla querría controlar los abusos policiales y de las Fuerzas Armadas. Pero que se encontraba frente a un dilema: por un lado no quiere que la imagen del país se vea dañada por violaciones a los DDHH, pero por el otro, al igual que los de línea dura, quiere derrotar a la guerrilla, y esto para Videla es prioritario (aún más que el tema de los DDHH). Según el informe de Chaplin, Videla no insistiría con el tema de los DDHH para no generar una ruptura en las Fuerzas Armadas (19760700 The Military Government).

Es interesante destacar, con todo, que ya desde un comienzo se relativizaba también este carácter moderado de Videla y la Junta, al menos en el terreno represivo. Un informe de la CIA, seguramente mejor informada que el embajador, pone entre paréntesis la referencia a la moderación videlista, destacando que se trata de una estrategia de marketing más que otra cosa: celebra “el ojo para las relaciones públicas” de la Junta Militar, dirigido no sólo al exterior, sino a crear dentro del país una “imagen de moderación y obtener apoyo popular”, destacando que entre los militares no hay consenso en cuanto a llevar a la práctica esta moderación (19760402 Argentine coup in perspective CIA.tif). El informe del Bureau de inteligencia del DOS confirma estas presunciones y vuelve a advertir, ya a principios de abril, que es muy probable que las violaciones de derechos humanos tendieran a generalizarse y a afectar la relación del régimen con EEUU: introduce por primera vez un

argumento que se volverá más y más frecuente con el paso del tiempo, según el cual aún no creyéndole a Videla en su pretendida vocación por refrenar la represión, sí debía reconocérsele en cambio la sinceridad de su alineamiento pronorteamericano, y que en caso de fracasar, lo que sobrevendría sería no sólo más represión sino un posible distanciamiento impulsado por sectores nacionalistas antinorteamericanos (idem). De manera que convenía aceptar el juego que Videla quería jugar, aunque el mismo fuera poco sincero.

Con el avance de ese primer año del Proceso, con todo, se volvió más difícil disculpar a Videla. Y aunque el criterio sobre su utilidad como posible aliado no se dejó de lado, las tensiones entre “hacerle el juego” o presionarlo se incrementaron entre los diplomáticos norteamericanos. El 27 de agosto, Maxwell Chaplin afirmaba que el contraterrorismo se había incrementado, que eran continuos los casos de torturas, secuestros y asesinatos. Y reconocía ya que la versión sobre la insinceridad Videla y de su voluntad de que se respeten los DDHH crecía. Esta opción no puede ser descartada, agrega, pero es más probable que las fuerzas de seguridad se estén aprovechando de las divisiones internas del gobierno, de directivas poco claras y del hecho de que el gobierno necesita de ellos para combatir a la subversión. “No está claro si hay voluntad del gobierno de controlar los abusos pero hay indicios de que se está moviendo en la dirección correcta. Miembros de los partidos (UCR, PJ) y sindicalistas también están preocupados por el tema de los DDHH pero están dispuestos a darle a Videla el beneficio de la duda, además creen que si Videla cae va a venir alguien de la línea dura. El modus operandi de las fuerzas de seguridad involucradas en abusos de derechos humanos demuestra que cuentan con un apoyo de arriba. La pregunta es de cuán arriba. Algunas teorías afirman que las fuerzas de seguridad que operan ilegalmente cuentan con la aprobación de Videla, y que éste para no dañar su imagen niega su responsabilidad y afirma querer terminar con ellas. En línea con lo reportado por Buchanan, el embajador concluyó que esta teoría no puede ser descartada pero no parece probable ya que otorga a Videla una mayor habilidad y machiavelismo del que parece ameritar” (19760826 Human Rights)

El informe de J. Buchanan del *Bureau of Intelligence and Research* del Departamento de Estado al que se refiere Chaplin data de seis meses después del golpe, y

afirmaba que “grupos de ultraderecha compuestos por oficiales de seguridad fuera de servicio operaban con una impunidad que demostraba que contaban con el aval de altos oficiales del gobierno y de las fuerzas de seguridad”. Buchanan decía que probablemente Videla desaprobaba esas acciones pero que no se podría esperar un cambio de la situación hasta que no desapareciera la amenaza de los grupos de ultraizquierda. Hacía una mención a la teoría según la cual Videla estaba detrás de los grupos de ultraderecha y que permitía que operaran hasta que la situación se hiciera intolerable para que hubiera presión de afuera y él fuera el que pusiera la situación bajo control. Buchanan desaprueba esta teoría, de nuevo, porque duda de la capacidad de Videla para haber concebido tal plan, y de la unidad de la corporación militar que el mismo requeriría (19760930 Argentina).

No eran muchas las voces que disentían con este análisis, pero cada día que pasaba se hacían más audibles. Entre ellas, se destaca la delegación israelí en Buenos Aires, que tenía una opinión bien diferente. El 24 de junio un diplomático israelí dejaba sentada la posición de su embajada con respecto a la situación de los derechos humanos y a las denuncias de antisemitismo en Argentina: la delegación consideraba que los secuestros y asesinatos de izquierdistas eran producto de una decisión política del gobierno y no de la falta de control de las fuerzas de seguridad. El gobierno argentino, se afirmaba claramente, había decidido evitar el camino de Pinochet (de fusilamientos públicos) y dejar que las fuerzas de seguridad operaran bajo cualquier método disponible, mientras que dejaban al gobierno la posibilidad de negar responsabilidad en lo que hacían. Una vez destruida la oposición, y en el momento en que hubiera una presión por poner la situación de los Derechos Humanos bajo control, el gobierno sometería a los “grupos de extrema derecha” (19760623 Israeli view):

*“Los abusos de derechos humanos como secuestros y asesinatos de militantes de izquierda y exiliados extranjeros son resultado de una decisión política del gobierno argentino, y no de una falta de control de los elementos de seguridad [...] Los militares argentinos tomaron la decisión de eliminar la subversión y el terrorismo, y de silenciar y aterrorizar a toda la potencial oposición, mucho antes del golpe del 24 de marzo. La única cuestión restante era cómo hacerlo con menor exposición a las críticas externas que las que habían*

*aislado al régimen militar en Chile. El gobierno argentino dio luz verde a las fuerzas de seguridad para hacer frente al problema de seguridad interna con cualquier método considerado apropiado, pero siempre manteniendo al gobierno argentino en una posición de “posible negación” de responsabilidad [...] Cuando la destrucción de la oposición interna ya no tuviera más peso que las críticas internas e internacionales, el gobierno argentino finalmente sería capaz de poner bajo control los abusos de “elementos de seguridad no autorizados” y “extremistas de derecha”.*

Otro dato sugerente de estos mismos meses de mediados de 1976, es el progresivo cambio de actitud del embajador Hill: en poco tiempo pasaría de adherir a las tesis de Chaplin y Buchanan, a ser su abierto contradictor. Según el testimonio que brindara al Archivo Oral (AHO, 2007) Robert Cox, entonces editor del Buenos Aires Herald, y hombre de consulta de los funcionarios de la embajada, este giro fue fruto de una experiencia familiar: la suerte corrida por amistades de los hijos del embajador, que distaban de ser guerrilleros y eran secuestrados en la noche durante operativos militares, luego de lo cual aparecían muertos en supuestos enfrentamientos, o simplemente se perdía toda noticia de ellos.

La confusión que ello estaba provocando en la diplomacia norteamericana queda bien en evidencia en otro diálogo entre Kissinger y su gabinete, que data del mes de septiembre (19760709.tif Secretary of State): allí Harry Shlaudeman cumple la función que al momento del golpe había cumplido Rogers, advirtiendo la complejidad de la situación y sugiriendo una vía de acción más distante de la que impulsaba Kissinger:

*SHLAUDEMÁN: Bueno, déjenme decir que parece que este grupo de Videla en Argentina – las fuerzas de seguridad están totalmente fuera de control. Hay olas de asesinatos diarias.*

*SECRETARIO KISSINGER: ¿Para quién trabajan las fuerzas de seguridad?*

*SHLAUDEMÁN: Ahora están trabajando para sí mismos.*

*SECRETARIO KISSINGER: Sí, pero ¿en qué dirección?*

*SHLAUDEMÁN: Se ha convertido en una guerra de mafias a gran escala entre las fuerzas de seguridad y las guerrillas urbanas de izquierda. Nuestros activistas por los derechos humanos – quienes a veces me parece que son los únicos – están permanentemente cuestionándonos sobre Argentina – porque piensan que es otro Chile – pero no lo es.*

*SECRETARIO KISSINGER: Es peor.*

*SHLAUDEMÁN: Es totalmente diferente. Los chilenos eliminaron su oposición en las primeras 24 horas, pero en Argentina, nadie tiene control sobre nada. Y esta situación es negativa.*

*SECRETARIO KISSINGER: ¿Pero qué podríamos hacer si quisiéramos hacer algo...*

*SHLAUDEMÁN: Francamente, no creo que haya nada que podamos hacer.*

*SECRETARIO KISSINGER: ... si están fuera de control?*

*SHLAUDEMÁN: Creo que tenemos que esperar a que surja alguien que pueda tener cierto control.*

*SECRETARIO KISSINGER: ¿Las fuerzas de seguridad trabajan según alguna teoría? Quiero decir, ¿tienen blancos específicos?*

*SHLAUDEMÁN: Sí. Creo que su teoría es que pueden usar el método chileno – es decir, aterrorizar a la oposición – inclusive matando a sacerdotes, monjas y otros.*

*El problema es que enfrentan una situación más violenta que los chilenos, en la que las guerrillas están bien organizadas, muy bien armadas.*

*SECRETARIO KISSINGER: ¿Pero quiénes apoyan a las guerrillas?*

*SHLAUDEMÁN: La mayor parte de su apoyo es interno. Tienen muchos partidarios de clase media.*

*SECRETARIO KISSINGER: ¿Pero dónde consiguen las armas?*

*SHLAUDEMÁN: Las consiguieron matando gente y construyendo un gran fondo de guerra.*

*SECRETARIO KISSINGER: Sí, pero ¿cuál es su orientación básica?*

*SHLAUDEMÁN: Hay dos grupos – el ERP y los Montoneros. El ERP es trotskista...*

*SECRETARIO KISSINGER: Ésa es una gran opción.*

*SHLAUDEMÁN: ...realmente*

*SECRETARIO KISSINGER: Pero si estas guerrillas son tan poderosas que nadie las derrota, ¿qué están queriendo decir? ¿que pueden aterrorizar y secuestrar?*

*SHLAUDEMÁN: Exactamente.*

*SECRETARIO KISSINGER: Quiero decir, ¿qué es lo que debe hacerse? Porque claramente estos movimientos no van a interrumpir los secuestros, ¿no?*

*SHLAUDEMÁN: No, para nada.*

*Creo que la diferencia entre los dos países debe ser explicada, la diferencia entre estas situaciones, y el hecho es que no podemos hacer nada en este momento, creo.*

*SECRETARIO KISSINGER: Pero inclusive si pudiéramos, ¿qué podríamos hacer? ¿La consecuencia operativa de decirle al gobierno que cese no sería que los terroristas tomen el poder, si la situación es que como la describiste?*

*SHLAUDEMÁN: Sí, y también creo que decirles que cesen no es productivo, porque la gente que lo está haciendo, no tiene control real de la situación.*

*SECRETARIO KISSINGER: Ésa es la posición. Pero tampoco es sólo violencia sin sentido, ¿no?*

*SHLAUDEMÁN: No, aunque desciende a esos niveles a veces.*

*SECRETARIO KISSINGER: Pero en ambos lados.*

*SHLAUDEMÁN: Bastante. El terror - las guerrillas están usando estas bombas crecientemente, como por ejemplo la historia de la mejor amiga de la hija del jefe de policía que puso una bomba bajo su cama y lo hizo volar.*

*SECRETARIO KISSINGER: ¿Y qué estaba haciendo ella en su cuarto? (Risas.)*

*HABIB: Había ido a estudiar. (Risas.)*

*SECRETARIO KISSINGER: ¿Querés hacer un memo para mí...*

*HABIB: Sí.*

*SECRETARIO KISSINGER: ...con el análisis sobre los diversos grupos para que pueda entender lo que estoy leyendo?*

*HABIB: Sí.*

*SECRETARIO KISSINGER: O.K. EA (East Asia?) tiene algo?*

*GLEYSTÉEN: Nada.*

*SECRETARIO KISSINGER: Me gustan los Bureaus tranquilos. (Risas.)*

Lo cierto es que la idea de un “Videla moderado” que actuaba como dique de contención de generales y marinos duros era todavía en ese entonces compartida por

muchos de los denunciantes de las violaciones a los derechos humanos. Y esto seguiría siendo así al menos hasta 1977: en los primeros reportes de las visitas de Patricia Derian (la encargada de Derechos Humanos del DOS designada por James Carter), en que se entrevistó con destacados miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, como Alfredo Bravo, Emilio Mignone, así como con periodistas y sacerdotes, la opinión generalizada que se recogió fue que “Videla es una esperanza” y si él fracasaba era de prever “un endurecimiento de la represión y de la política militar en todos los aspectos” (19770407 Carta Rondon-Hill). Fortalecer a “los moderados” parecía ser la mejor opción aun para defensores de las víctimas y sus propios familiares, en su expectativa de poder salvar las vidas de los desaparecidos o evitar que su número siguiera multiplicándose.

### **La diplomacia silenciosa para crear y sostener a un aliado**

En este marco los debates en el seno de la diplomacia norteamericana respecto de qué debían hacer frente al Proceso adquieren su pleno significado. A mediados de 1976 se produjo un fuerte cruce entre Kissinger y el embajador en Argentina al respecto. Hill, como dijimos, había tenido tiempo ya de conocer de primera mano datos fehacientes de la represión ilegal. Y envió una serie de notas al DOS reclamando un cambio de actitud. Para el embajador la prescindencia no alcanzaba. En septiembre<sup>3</sup> de 1976, luego de reunirse con Videla, había comprobado incluso que las muestras de aprobación expresadas por el secretario de estado al gobierno argentino en junio estaban quitando toda credibilidad a sus propias expresiones de preocupación por la situación que se vivía en el país (**DOS 19760924** - este es el único documento que no encuentro, ¿me podrías dar algún otro dato para ubicarlo?). Un mes más tarde, luego de que en un viaje a Nueva York el canciller argentino César Guzzetti se reuniera con Kissinger y éste le dijera nuevamente que deseaban el éxito del gobierno argentino y que los Estados Unidos no le causarían problemas al régimen (19761007\_Memorandum), Hill se encontró con a un canciller “eufórico”. Alarmado, envió un cable a Washington protestando por el mensaje que se le había dado a Guzzetti en los Estados Unidos:

---

<sup>3</sup> 19761007\_Memorandum

*“Los comentarios hechos por Guzzetti tanto a mí como a la prensa argentina desde su regreso no son los de un hombre que ha quedado impresionado por la gravedad del problema de los derechos humanos como es visto desde Estados Unidos [...] Guzzetti viajó esperando escuchar advertencias fuertes, firmes y directas sobre las prácticas de derechos humanos de su gobierno. En lugar de eso, volvió en un estado de júbilo, convencido de que no existe un problema real con el gobierno de Estados Unidos sobre este tema. En base a lo que Guzzetti seguramente está informando al gobierno argentino, éste debe creer que si tiene problemas con Estados Unidos sobre derechos humanos, están limitados a ciertos elementos del Congreso y lo que considera como segmentos menores de la opinión pública, parciales o no informados. Mientras exista esta convicción, sería poco realista e inefectivo para esta Embajada seguir presionando al gobierno argentino sobre las violaciones a los derechos humanos” (19761007\_Memorandum)*

La nota de Hill tuvo su secuela. El segundo de Kissinger en el DOS, el subsecretario Harry Shlaudeman le respondió a los pocos días que el Canciller Guzzetti había escuchado “sólo lo que quería escuchar” pero que sería prudente dejar de reclamar por la situación de los derechos humanos (19761020.tif Memorandum). En suma, desmentía a Guzzetti y la alarma de Hill, pero le confirmaba su impresión de que preocuparse por la cuestión no era una prioridad. Es importante rescatar los argumentos que ya entonces planteaban varios funcionarios del Departamento, y el propio embajador, para promover una presión más decidida respecto a la represión ilegal: en su opinión, que será en el futuro la de los moderados de la gestión demócrata, no se trata de apoyar al régimen, si no a quienes pueden evitar que él se endurezca más. En palabras de Hill, en un informe del 27 de abril:

*“Estados Unidos debería seguir una política de apoyo cautelosa hacia la nueva junta, cautelosa al menos hasta que demuestre estabilidad y un profundo compromiso con la moderación. Cuando esto sea claro, deberíamos apoyarla sin mayores reservas. Una política de apoyo incluiría respuesta a pedidos de asistencia razonables. Deberíamos usar esta política de apoyo para alentar a la junta a adoptar políticas económicas y de inversión razonables, a continuar con el respeto por los derechos humanos y a mantener su línea moderada actual. Por el momento, debemos mantener cierta distancia entre nosotros*

*y la nueva junta y no darle a ella (o a la opinión pública) la impresión de que tiene un cheque en blanco de parte nuestra.” (19760427 CASP (Country Analysis and Strategy Paper) for Argentina.tif)*

De aquí que se pueda leer en otros términos la discusión sobre la responsabilidad de Videla, y la tensión en la embajada y entre la embajada y el sector más colaborativo del DOS: casi ningún actor local les está pidiendo una condena del régimen que incluya la descalificación de su presidente. Lo que se discute, en todo caso es si, tomando por buena la disposición de Videla a imponer moderación a la represión y tener buenas relaciones con EEUU, no se lograrán mejores resultados que develando su escaso compromiso al respecto, con lo que se fortalecería la posición nacionalista ya de por sí extendida entre los militares argentinos:

*“Los intereses de Argentina, y los nuestros, se basan en el éxito del gobierno moderado liderado por el General Videla [...] Si el gobierno de Videla fracasa, por un lado dejaría espacio a los militares de línea dura, quienes llevarían a Argentina a la polarización del pasado y quienes, teniendo una inclinación más nacionalista que los moderados, no tendrían una actitud favorable hacia Estados Unidos...” (19760329 Videla’s moderate line prevails 0009F2.tif)*

El temor a un endurecimiento nacionalista es a todas luces el factor más gravitante en estas discusiones, y al respecto no deja de ser atendible el diagnóstico: actores del régimen lo estaban impulsando, tanto desde el Ejército como desde la Armada.

En este análisis, en suma, se ha enfocado la discusión ya no en la participación de Videla en el plan represivo, sino en las opciones disponibles para la diplomacia norteamericana ante un gobierno en el que se adivinaban ya en un comienzo fuertes luchas facciosas. Éste es un factor a tener en cuenta, incluso por encima de los diagnósticos o creencias respecto al papel de Videla en la represión. Porque lo cierto es que estos diagnósticos irán variando a lo largo de 1976, y puede decirse que en la segunda mitad de ese año ya son muy extendidos los que señalan que no cabe disculparlo. Pero sí cabía aún

apoyarlo. Y es que el otro factor, el de la distinción entre un ala nacionalista dura y un ala prooccidental aperturista, ha dejado de estar subsumido a lo anterior, y se ha vuelto mientras tanto el factor más relevante a tener en cuenta como elemento para la toma de decisiones del DOS: más allá de si cabía dar crédito o no a la pretensión de Videla de ser un moderador de la represión, aparecía como única opción, el único interlocutor confiable y potencial aliado local de la política exterior norteamericana. Por tanto correspondía “sostenerlo a distancia”, con una “política de apoyo cautelosa”. Como adelantamos, esto es relevante por otro motivo, y es que el resultado de estos debates entre funcionarios del DOS y la embajada en la segunda mitad de 1976 será la base sobre la que se afirmará la política de “diplomacia silenciosa” del ala moderada de la gestión de Carter a partir del año siguiente.